

TERCERAS JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA DE AUDHE

*Montevideo 9 al 11 de julio de 2003*

SIMPOSIO N°21

**TRANSIÇÕES PARA O CAPITALISMO EM REGIÕES DO CONE  
SUL –BRAZIL,URUGUAY,PARAGUAY Y ARGENTINA- SÉCULO  
XIX E PRIMEIRA MÉTADE DO SÉCULO XX**

“Claves ocultas en las historias nacionales. Los procesos de transición al capitalismo en un área de la región pampeana. Segunda mitad del siglo XIX”

MARTA BONAUDO (CONICET – UNR)

ELIDA SONZOGNI (UNR – CESOR)

La ponencia intenta ofrecer un balance a modo de síntesis, de las cuestiones que hemos venido trabajando en torno a la problemática propuesta en el simposio, con el propósito de someterlas al debate, contribuyendo -desde el aparato conceptual así como desde los ejes históricos- al análisis comparativo. En tal dirección, la experiencia santafesina provee un margen específico y peculiar en relación a la región macro pampeana en los modos de construcción de la sociedad de mercado así como en la organización del sistema político que denota la aparición de nuevos actores sociales o la redefinición y adaptación de los antiguos.

**Hacia la construcción de una sociedad de mercado**

Los procesos históricos que acompañan el surgimiento de los estados nacionales en el Cono Sur podrían ser caracterizados teóricamente como los referentes empíricos de la emergencia de *sociedades de mercado* en términos de la economía clásica. Si uno revisita los textos de Adam Smith se encuentra con que la *sociedad de mercado* en la que está pensando propone una nueva representación social que modifica o intenta desplazar el proyecto democrático de construir la ciudad como lugar de la ciudadanía por otro arquetipo en *donde el mercado*

y no el contrato es el verdadero regulador de la sociedad.<sup>1</sup> Esta nueva instancia , la del mercado, aparece como superadora de la ofertada por el *pacto* ya que no sólo *instituye* un tipo de sociedad sino que también define su *regulación*. Por una parte, porque es la mano invisible del mercado la que impone un tipo de relación neutra y no personalizada que se autoregula sin apelar a los criterios de autoridad y menos de autoritarismo. Por otra, porque esta despersonalización se rige por un orden jurídico que establece las reglas de juego. Produciendo una compleja articulación entre derechos del hombre y principios económicos que regulan el mercado, el liberalismo afianza la figura del actor de la modernidad: el individuo- portador de razón- con sus necesidades a satisfacer por el mercado y sus derechos a ser reconocidos y garantidos por el Estado. Desde esta perspectiva el mercado se transforma en el medio y fin del desarrollo social . Potenciada la generalización de los intercambios impone como consecuencia una división social del trabajo que conduce a una verdadera socialización cuya finalidad última es la *independencia individual* realizada en la *dependencia generalizada*. Dependencia entre productores y entre productores y consumidores. Pensando en una sociedad cuyo motor es la producción de la riqueza, cuya generalización es el consumo, nos encontraremos con un proyecto societal que desde la mirada de estos clásicos define a la sociedad económica como el lugar del interés general, en donde el consumidor es el ciudadano del mercado y la sociedad de mercado el conjunto de la nación. Si bien la utopía smithiana plantea la *desterritorialización* de la economía como realización de la política, requiere provisoriamente la constitución del Estado - Nación, mirado como el agente que garantiza la *territorialización* para facilitar la construcción de la sociedad de mercado a partir de roles definidos. Ese espacio de soberanía política opera delimitando fronteras que contribuyen a diferenciar el espacio interior del exterior. Pero fundamentalmente su objetivo central en esta dirección es desestructurar las formas de organización social precedentes profundizando los procesos de individuación y al mismo tiempo la consolidación de un espacio *homogéneo*. Pensar tal homogeneidad implica avanzar en la privatización generalizada del territorio para abrirlo como espacio económico por una parte, pero cerrarlo como territorio jurídico por otra.

Ahora bien, estos parámetros teóricos alimentados con las experiencias históricas del capitalismo originario y que constituyen referentes fuertes para intelectuales y políticos de la segunda mitad del siglo XIX , ¿en qué medida dan cuenta de la complejidad de los procesos sociales que acompañan la instauración de las relaciones capitalistas en estas latitudes?

Es indudable que al contemplar la coyuntura internacional en la que se inscriben estas transformaciones, un primer rasgo perceptible es la asincronía observable entre las dinámicas del orden burgués de países de capitalismo central, como es el caso de Gran Bretaña, y los espacios que comienzan a integrarse paulatinamente a aquel orden. Un segundo rasgo se refiere a que el hecho mismo de la consolidación y expansión de las primeras experiencias europeas coloca a las áreas de la periferia en un marco de división internacional del trabajo prefijado *desde el afuera*, condicionando los ritmos y las características de los propios procesos internos de división social del trabajo y de generalización de los intercambios. Más aún, la rearticulación capitalista de un mercado crecientemente mundial está signada por flujos de capital, fuerza de trabajo y mercancías

---

<sup>1</sup> Rosanvallon Pierre, *Le capitalisme utopique. Histoire de la idée de marché*. Éditions du Seuil, 3ª Edición, 1999, Paris

que no son el resultado de procesos endógenos de las áreas receptoras. En consecuencia, cuáles son las estrategias reales que adopta la integración de áreas como la santafesina- en el interior pampeano- en el camino a la institucionalización de la sociedad de mercado?

### **Un espacio, un tiempo...**

Como lo hemos señalado en otros trabajos, durante la primera mitad del siglo XIX Santa Fe no escapa a la desolación y el aislamiento que caracteriza la situación de muchas jurisdicciones. Del grupo de provincias del entonces Litoral, ella ofrece las visiones más negativas de estancamiento económico, despoblación, amenaza indígena, que marcan fuertes obstáculos para un verdadero *despegue*. Hasta la crisis del rosismo(1852), con oscilaciones cíclicas, los pilares económicos de la provincia se asientan sobre la actividad mercantil y la ganadería, afectados empero por la persistencia de las guerras civiles sobre su suelo y la irrupción sorpresiva de los malones. A ello se suman los condicionamientos externos desde el sur(Buenos Aires) y desde el norte (Paraguay) para un aprovechamiento integral de su principal vía de navegación, el río Paraná <sup>2</sup>

El triunfo urquicista y la organización de la Confederación influyen fuertemente sobre el destino de la provincia. Dos decisiones, una de carácter geopolítico y otra jurídica, le abren nuevas perspectivas. En el primer caso, la elevación del oscuro Pago de los Arroyos(Rosario) al rango de principal puerto de la Confederación. En el segundo, la sanción de la ley de *Derechos Diferenciales* procura menguar la competencia con el puerto de Buenos Aires. Ello permite una primera reactivación comercial -particularmente en la ciudad del sur- potenciada conjuntamente con otros emprendimientos alentados desde el propio Estado Provincial (colonización agrícola, extensión de la red ferroviaria, complejización de la esfera financiera, etc) que tipifican de manera singular la especialización productiva de la provincia.

Estos primeros intentos de dar respuesta a un verdadero desafío planteado por la realidad provincial de los sesenta se vuelven más complejos y ambiciosos a lo largo de las décadas siguientes y en el horizonte de los noventa es otra la sociedad que se ha plasmado, fruto de la llegada de importantes contingentes europeos y la permanente recepción de migrantes provenientes de otras provincias y países limítrofes.

El paisaje provincial abandona su chata y árida fisonomía de la primera mitad del siglo pasado. La tenaz difusión de la colonización basada en la pequeña y mediana propiedad ha sembrado de núcleos poblados el centro-oeste santafesino, pero también otras áreas: las que conforman el *hinterland* rosarino y las que, con tendencias más débiles, se desarrollan en el norte y en la costa.

El fenómeno de urbanización - estrechamente vinculado al aumento de la población- muestra por una parte, la más alta concentración demográfica en la capital provincial- la ciudad de Santa Fe- aunque con mayor pujanza en Rosario, el puerto del sur. Por otra, esa primacía no impide la formación de otros espacios urbanos, en general cabeceras de los departamentos en que se divide el territorio, cuyos procesos formativos se articulan al proyecto de colonización agrícola. El crecimiento demográfico y la urbanización que registra el área corren paralelos a su expansión productiva. Esta se desarrolla no sólo en un espacio constantemente ampliado sino que obliga a una verdadera modificación del eje

---

<sup>2</sup> Los dos obstáculos están referidos a la fuerte primacía de la Aduana de Buenos Aires y a la guerra de la Triple Alianza.

dinámico de la producción. Las antiguas estancias del centro- este y las del sur comienzan a sufrir un paulatino proceso de subdivisión, al tiempo que la chacra -unidad productiva presente en etapas más tempranas- se redefine en el interior del nuevo escenario. En el marco de tales condiciones, ésta puede adoptar diferentes apariencias en cuanto a la relación entre propiedad y tenencia. Pero es sin duda, la responsable de la evolución agrícola santafesina que convierte a la provincia en el principal centro exportador de cereales en la última década del siglo<sup>3</sup>. Esta particular configuración asentada sobre el presupuesto de la agricultura como vehículo de un proceso de *redención social*, cuyas bases se vinculan con la acertada conjunción de agricultura, propiedad y trabajo familiar, al llegar a los noventa y más allá de la prosperidad alcanzada, revela sus límites. Al bloquearse en esa coyuntura el acceso a la propiedad, el capitalismo agrario santafesino va a seguir las mismas líneas del modelo macro-pampeano hegemónico sostenido en una estructura de estancia que apela a la pequeña unidad, ahora de tenentes, como estrategia de potenciación de cultivos combinados. Tal viraje no implica la desaparición en su horizonte de ese modelo de acumulación social alternativo basado en la pequeña o mediana propiedad.<sup>4</sup>.

### **Delimitar el territorio político y llenar el espacio económico**

Las imágenes que preceden nos muestran el resultado de un proceso de casi cuarenta años pero no nos permiten comprender la complejidad del mismo. Por lo tanto, en una primera aproximación es importante analizar cómo el área santafesina integrada a un Estado-Nación que ha logrado definir los límites externos, se enfrenta con el problema de consolidar su soberanía en el interior de ese territorio. Este sería el primer paso para alcanzar la correspondencia entre el territorio político y el *espacio económico*

El Estado- Nación se instituye por la existencia, entre otras, de un territorio que es el espacio de la soberanía para lo cual debe darse como objetivo político reducir enclaves y delimitar fronteras, contribuyendo a la construcción del concepto de *espacio interior* diferente del *exterior*. Pero el territorio no es soporte pasivo de la soberanía política sino un instrumento dinámico y activo de constitución del Estado como forma de articulación política entre el espacio y la sociedad buscando su *homogeneidad*.

En esta perspectiva, el proceso de conformación y ocupación del espacio santafesino en el interior de un Estado- Provincia que sigue las líneas directrices del nacional, implica en primer lugar, una sostenida política territorial dirigida a apropiarse tanto en el norte como en el sur de áreas que aun permanecen en poder del indígena. Para ello recurre a un aparato militar financiado con el aporte concurrente del Estado Federal, la propia provincia y un sector de esos grupos burgueses atraídos por las posibilidades de inversión y beneficio que las *tierras nuevas* proponen. El período entre 1850 y 1880 es el que exhibe los mayores esfuerzos para eliminar tales enclaves y ampliar las fronteras interiores. En segundo lugar, las diferentes administraciones provinciales se abocan a una ardua política de

---

<sup>3</sup> Cortés Conde, Roberto, *El progreso argentino*, Edit. Sudamericana, Buenos Aires, 1979, pág. 64

<sup>4</sup> ver Gallo, Ezequiel, *La pampa gringa*, Edit. Sudamericana, Buenos Aires, 1983; Halperin Donghi, “¿Para qué la inmigración. Ideología y política inmigratoria en la Argentina (1810-1914)”, *El espejo de la Historia*, Edit. Sudamericana, Buenos Aires, 1987; Bonaudo, Marta y Sonzogni, Elida, “Viejos y nuevos colonos. Su convergencia en un mundo en transición”, en *Ruralia*, FLACSO, Buenos Aires, 1990, N°1.

establecimiento de los límites interprovinciales. Ello las conduce, por una parte, a llevar adelante mecanismos de negociación con particulares que no siempre logran escapar de largos y costosos pleitos hasta dirimir los derechos jurisdiccionales en pugna. Por otra, a disputar a los estados limítrofes la jurisdicción sobre áreas de imprecisa demarcación. Recién en los últimos años de la década de los ochenta emerge el mapa geopolítico actual de la provincia.

En esta dinámica el proceso de institucionalización de los límites externos corre paralelo a una estructuración interna cuyos propósitos son básicamente la privatización del territorio, la desestructuración de formas de organización social precedentes y la mercantilización generalizada de los factores de producción.

*a)Privatizar la tierra pública y convalidar la propiedad privada*

Frente al territorio, existe un consenso previo entre los particulares y el Estado en torno a su inexorable expropiación de las manos indígenas y su paulatina incorporación al mercado, objetivo que implica la coexistencia de diferentes estrategias. Junto a las de exterminio, las de integración; frente a las de expulsión, las de asentamiento pacífico de comunidades y su inserción en actividades productivas dentro de zonas previamente delimitadas<sup>5</sup> De esta manera, desde 1858 hasta 1884, se llevan adelante sucesivas campañas destinadas a producir el corrimiento de fronteras.

El tema de la frontera es en principio, responsabilidad del Estado Central, pero el costo del esfuerzo y la fragilidad de los recursos militares generan un accionar compartido entre las fuerzas nacionales y las guardias provinciales. A ellos, tarde o temprano, se suman los particulares, en la medida en que las operaciones militares exigen más recursos de los disponibles por ambas instancias gubernamentales. Esta situación está en el origen de una primera violación de los acuerdos consensuados, marginando de las leyes del mercado -por lo menos en un primer momento- una parte importante del fondo territorial. Dos instrumentos diferentes se aplican con tal propósito: el empréstito interno y las leyes de premios militares. En el primer caso, éste aparece como la vía para obtener a precios mínimos “tierras denunciadas fuera de la línea de frontera”<sup>6</sup>Un ejemplo en este sentido es el de los suscriptores del empréstito de \$F60.000, en dinero o en hacienda, para el “mantenimiento y equipo de una columna expedicionaria al interior del Gran Chaco en la parte del territorio que corresponde a la provincia por el tiempo que se juzgue conveniente”, los que se comprometen al poblamiento con familias agricultoras, eximidas de “servicios personales provinciales”. En el segundo caso, la recompensa de tierras a quienes han servido o están sirviendo a la patria, se vincula a la tradición revolucionaria en

---

<sup>5</sup> La modalidad de reducir a los indios está fuertemente arraigada en la tradición colonial Mensaje del Gobernador Cabal, págs. 234 y 235, en *Historia de las Instituciones de la Provincia de Santa Fe*, Santa Fe, 1972, Edición Oficial, Tomo IV., Archivo de Gobierno, Archivo Histórico Provincial, Santa Fe, 1880, Tomo 58.

<sup>6</sup> *R.O., op. cit.*, Tomo VI, págs. 247 y ss.

<sup>7</sup> Rosanvallon, Pierre, *La nueva cuestión social*, Editorial Manantial, Buenos Aires, 1995, págs. 49 y ss.

<sup>8</sup> Cf. CURENA, “Hacia la configuración de un orden social: normatividad y conflicto”, Rosario, 1986, mimeo, págs. 25 y ss.. Las leyes de premios militares quedan definitivamente eliminadas en 1889.

<sup>9</sup> Archivo de Gobierno, AHP, Tomo 37, 24/07/1872

<sup>10</sup> *Ibidem*, 21/07/1872

cuyo interior se gesta una fuerte articulación entre lo social y lo cívico alimentada por la situación bélica. Allí emerge la noción de *deuda* que el Estado contrae con los individuos, dispuestos a dar la vida por la patria<sup>7</sup>.

En tal contexto son beneficiarios tanto quienes en esas cuatro décadas intervienen en luchas internas, campañas contra el indio o guerras externas (guerra del Paraguay) cuanto los que se convierten en los postreros bastiones de un orden que todavía necesita ser garantizado<sup>8</sup>. Entre estos últimos, emerge una figura peculiar: la del *fortinero labrador* cuya presencia en áreas de alto riesgo, garantiza ocupación y producción. Ejemplos típicos de esta situación se dan en la frontera sur.

En “Melincué Nuevo”(Colonia San Urbano), se otorga a los potenciales pobladores, en propiedad, una suerte de tierra de veinte cuerdas cuadradas, “fijando un término para que se labren los terrenos, y previniendo que si no cumple el agraciado se tendrá por abandonada la concesión”<sup>9</sup>. La demora en la tramitación y otorgamiento de los títulos de propiedad produce desajustes importantes, tal como lo señala el juez de paz Eugenio Peralta de San José de la Esquina, dirigiéndose al Ministerio: “... le recomiendo mucho las escrituras porque los besinos (sic) se están despoblando de aquí ganando el sentro (sic) de las colonias... Lla (sic) se an (sic) ydo (sic) como diez familias...”<sup>10</sup>.

A medida que las campañas militares le permiten engrosar la propiedad pública, el Estado santafesino busca arbitrar los medios para alcanzar, por una parte, una adecuada definición de la propiedad privada urbana y rural. Con ello pretende evitar las crecientes tensiones y conflictos que estallan entre los particulares y las administraciones estatales central o provincial e incluso entre estas últimas. Las dificultades reconocen diversos orígenes: la superposición de áreas de incumbencia entre funcionarios nacionales y provinciales para definir la apropiación de tierras, particularmente en áreas de frontera; el establecimiento errático de los límites de las propiedades; el avasallamiento de las vías de tránsito comunes; la depredación de sembradíos por el ganado; la extracción indebida de insumos en terrenos fronterizos, etc..

Paralelamente, se irán gestando las vías para facilitar la apropiación privada de este bien.

Al margen de los instrumentos utilizados en el mismo proceso de sustracción de la tierra al dominio indígena que mencionáramos, a los que posteriormente se sumarán las porciones retenidas por el Estado como contrapartida de empréstitos externos o donadas a las compañías ferroviarias para estimular la inversión, se detecta una voluntad explícita de los gobiernos hacia la *privatización* de la tierra pública. Este proceso muestra la convergencia de dos objetivos bien definidos con miras a potenciar las condiciones de desarrollo: establecer los criterios normativos a los que deben ceñirse las ventas de tierras públicas y favorecer las iniciativas que coadyuvan al despliegue de un modelo de desarrollo capitalista basado en la pequeña o mediana propiedad.

El primer camino elegido es el de la enfiteusis. Desde finales de 1853, se formalizan las condiciones a través de las cuales los particulares podrán acceder a una tenencia precaria de terrenos de pastoreo o de pan-llevar, por el término de diez años, a cambio del pago de un canon<sup>11</sup>. Si bien la ley de enfiteusis no preve en su articulado la obligación del

---

<sup>11</sup> R.O., op. cit., Tomo II, págs. 145, 180/181

poblamiento, éste es un objetivo prioritario para las diferentes gestiones. En el mismo año de promulgación de la ley citada, se concreta un contrato con el empresario Aarón Castellanos, para la radicación de 1000 familias de labradores europeos, distribuidas en grupos de 200, a fin de dar origen a cinco colonias que se ubicarían en un amplio espacio sobre la ribera norte del Paraná<sup>12</sup>.

El proyecto de colonización agrícola demanda, sin duda, gastos superiores a los recursos del Estado. Esto motiva seguramente, en parte, la decisión de vender dos años más tarde, tanto las tierras dadas en enfiteusis como las disponibles para su enajenación<sup>13</sup>. No obstante el despliegue de una política tutelada del proceso de apropiación privada de la tierra, la administración central advierte que no pocos de los terrenos enajenados han caído en manos de especuladores “sin ventajas de ningún género para el público”. De ahí que prohíbe a los escribanos públicos autorizar contratos de tierras compradas al Estado si la condición de poblarlas no se ha cumplido<sup>14</sup>.

Es evidente que en esa coyuntura -entre 1857/58- el gobierno cuenta con una reserva potencial de tierras, pero su ocupación real sólo empieza a vislumbrarse, en la medida en que precisamente en ese año ‘58 recién comienzan las campañas de corrimiento sistemático de fronteras. Es por eso que, frente a la disyuntiva de favorecer la apropiación y poblar, opta por cursos de acción paralelos. Por una parte, recurre a empresarios o a empresas dispuestas a formalizar contratos de colonización a cambio de la cesión gratuita o a bajo precio, de la tierra pública. Estos parecen ser los únicos mecanismos de atracción para inversores remisos en emprendimientos todavía de alto riesgo. Por otra, insiste sobre la necesidad de dirimir las modalidades de venta de la tierra pública legitimando, al mismo tiempo, los derechos de propiedad privada.

La ley de tierras de 1858 incentiva el juego de la oferta y la demanda en el proceso de apropiación<sup>15</sup>. El espacio simbólico del mercado se dibuja bajo los portales del cabildo donde se lleva a cabo la subasta pública, suficientemente publicitada, dentro de la cual triunfa el mejor postor. Más allá de este propósito, la ley muestra las dificultades que existen en esa sociedad y en ese Estado para dirimir con claridad el caudal de tierras que pertenecen al fisco y el carácter genuino de la propiedad de los particulares. Ello conduce en 1862 a promulgar una ley de títulos que pretende transparentar la situación de la propiedad para facilitar su movilidad<sup>16</sup>. Al mismo tiempo se constituye en un instrumento para receptar información dispersa sobre la cual elaborar una estrategia impositiva, dado que el registro fija un determinado arancel por legua cuadrada.

Más allá de estos recaudos, la anarquía e imprevisión siguen caracterizando la política de tierras impresa por el gobierno. Así lo reconoce el propio gobernador Oroño: “... Las tierras fiscales se han dilapidado en épocas anteriores con espantosa profusión y el valor que han adquirido al presente reaccionando contra aquellas enajenaciones, ha venido a crear una funesta incertidumbre sobre las propiedades adquiridas, y una desconfianza para

---

<sup>12</sup> *Ibidem*, pág. 147 y ss; 13/06/1853

<sup>13</sup> *Ibidem*, pág. 286, 06/10/1855.

<sup>14</sup> *Ibidem*, pág. 392 y 393, 01/10/57

<sup>15</sup> *Ibidem*, pág. 458 y ss, 22/10/58. En el mismo año, una ley avanza en previsión de las modalidades que han de regir una empresa ganadera, declarando “suerte de estancia una legua de frente y dos de fondo, en cuya área de terreno solo se podrán como maximum, cinco mil cabezas de ganado vacuno, mil quinientas yeguas y cuatro mil cabezas lanar. *Ibidem*, pág. 435, 10/08/58.

<sup>16</sup> *Ibidem*, Tomo III, pág. 350 y 351, 30/07/62

la adquisición de nuevas suertes, que disminuye, como es consiguiente, la concurrencia de compradores y el valor de ellas en nuestro mercado”<sup>17</sup>

De las palabras del Gobernador se visualiza el impacto que sobre el mercado tiene la ausencia de normas claras en torno a la propiedad, reduciendo simultáneamente tanto la demanda como el precio de venta. Es por ello que reclama a la Legislatura la sanción de una “legislación invariable, equitativa y clara, que facilite en la práctica su ejecución inmediata”<sup>18</sup>

La legislación producida, si bien atiende una serie de aspectos no previstos en instrumentos anteriores, mantiene separados los objetivos de apropiación y de poblamiento. La ley sancionada en septiembre de 1865, autoriza al Ejecutivo a vender tierras fiscales, clasificándolas como baldías, entregadas en posesión o meramente ocupadas. Los procedimientos a seguir varían de acuerdo con la situación del bien. Así, los denunciantes de tierras baldías gozarán de preferencia en la subasta pública. En el caso de tierras ocupadas, el artículo 6to. considera poseedores legítimos “1ro. los que habiendo estado en posesión por más de cinco años acrediten haber denunciado el terreno para ocupar o poseerlos meramente con documentos expedidos por Autoridad competente; 2do. a los que hubieren obtenido títulos supletorios adquiridos por informaciones sumarias sin los requisitos legales; 3ro. a los meros ocupantes de tierras baldías que acrediten por los medios legales, haber estado en posesión por más de 10 años”<sup>19</sup> El rango de generalidad en que se mueve el articulado al definir el bien pasible de venta y la categoría de los posibles adquirentes se abandona al expresar los precios diferenciales en función de su localización geográfica, sin el establecimiento de un patrón universal. El rol del legislador queda aquí subsumido a las contingencias del mercado, introduciéndose en la norma los criterios de valorización que rigen en ese momento las pautas de la oferta y la demanda <sup>20</sup>

Sin embargo, sobre tal situación, se sobreimprime el accionar del Estado, ya que al fijar el precio, vuelve a sustraerlo del juego de los factores económicos.

Por fuera de la dinámica del mercado, se acude nuevamente al estímulo de la cesión de terrenos ubicados más allá de los límites de la frontera norte por seis años, con la única condición de poblamiento, indicado éste por la exigencia de una inversión de capital no inferior a \$400 por legua cuadrada. Otra previsión relacionada con la realidad de la frontera consiste en exceptuar de los alcances de la ley a las colonias indígenas, en las cuales el gobierno mensurará y distribuirá las parcelas en proporciones diversas según el número de miembros por familia.

La década del ‘60 muestra la intencionalidad reguladora respecto del proceso de enajenación de la tierra pública en la esfera normativa. Estos esfuerzos son acompañados asimismo, por la tendencia hacia la especialización en la estructura administrativa. En 1863, se crea la Oficina de Topografía y Estadística que rápidamente se convertirá en Departamento. A partir de entonces, la regulación de las operaciones inmobiliarias estará a cargo de profesionales de la ingeniería, agrimensores y, más tarde, estadísticos. Estos equipos serán responsables de las operaciones de mensura, amojonamiento, tasación,

---

<sup>17</sup> *Historia...*, *op. cit.*, Tomo IV, pág. 174 y ss.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> *R.O.*, *op. cit.*, Tomo IV, pág. 240

<sup>20</sup> Las variaciones de los precios fijados se dan en una gradiente que ubica los valores más altos en la franja comprendida entre el arroyo del Medio y el río Carcarañá a lo largo de la ribera del Paraná (cerca a nudos ferroviarios y portuarios) y la de mayor baratura, las situadas al oeste y al norte. *R.O.*, *op. cit.*, pág. 40 y ss.



delimitación de caminos vecinales y centros comunales en las colonias así como de la verificación de títulos. Además de estas tareas de coyuntura, participan en la conformación de una base de datos a través del levantamiento de un censo catastral del territorio provincial, confeccionado en 1872 por el ingeniero Chapeaurouge. En años posteriores, se realizan progresivos ajustes con planos desagregados a nivel departamental<sup>21</sup>. Es evidente que las circunstancias se han modificado veinte años después. Las campañas de recuperación territorial no sólo han sido exitosas sino también han contribuido al poblamiento sistemático y la presencia de colonias agrícolas, centros rurales e incipientes ciudades ha modificado el escenario provincial, a lo que se agrega el impulso dado a las obras ferroviarias.

En este contexto, la disponibilidad de tierras fiscales se ha reducido notoriamente. Sin embargo, se concretan en esta década las pautas definitivas pero también definitivas de entrega de tierras. Los instrumentos legales aparecen imbuídos por los criterios del nuevo ciclo inversor, pero paralelamente reafirman algunas de las concepciones que las distintas gestiones provinciales sostuvieron respecto del modelo de desarrollo. En la primera dirección se observa la fuerte articulación que se establece en la nueva ley de venta de tierras públicas de octubre de 1884, entre poblamiento e inversión. La condición de población, que se convierte en requisito indispensable para acceder a la compra de tierra pública, queda explicitada en el art. 5to.: “Entiéndese por población a los efectos de los artículos anteriores, la introducción de un capital de tres mil pesos nacionales por legua cuadrada, consistente en cercos, casas, haciendas o plantíos”<sup>22</sup>. Asimismo, el articulado anticipa el fin del ciclo de donación de la tierra pública en remuneración de servicios prestados a la provincia, que se concreta en la ley de 1889, con la supresión de los premios militares. O bien la *deuda* por el servicio a la Patria ha quedado saldada, o bien ya no será ésta la vía a través de la cual ha de efectuarse. Tanto la ley de 1884 como la de Colonización de 1889, vuelven de algún modo a ratificar, paradójicamente, el compromiso con un modelo de desarrollo capitalista asentado en la pequeña y mediada propiedad y alimentado a lo largo de cuatro décadas, por la política colonizadora<sup>23</sup>. La paradoja reside en que la afirmación conceptual de esta vía de desarrollo capitalista se produce en el momento en que la tierra pública se ha prácticamente agotado y las lógicas del mercado comienzan a tornar hegemónico el modelo alternativo basado en la gran propiedad. En el complejo proceso de constitución de ese nuevo *espacio económico* el paisaje provincial muestra enormes desequilibrios. Mientras el núcleo fuerte de unidades productivas basadas en la pequeña y mediana propiedad se consolida en el centro-oeste santafesino con algunas manchas en los departamentos del sur, el extremo meridional exhibe la primacía de estancias- ahora de cultivos combinados- a imagen y semejanza de la vecina Buenos Aires.

---

<sup>21</sup> *Ibidem*, Tomo IV, pág. 39; CURENA, *op. cit.*, pág. 8.

<sup>22</sup> *Ibidem*, Tomo XII, pág. 318, 18/10/84

<sup>23</sup> *Ibidem*, Tomo XVII, pág. 136 y ss, 04/12/89. Es indudable la movilidad de la tierra volcada al mercado en el lapso de quince años. En 1887, el mapa catastral registra que el estado sólo dispone de 30.000 has., cifra que contrasta con la ponderada por Jonás Larguía en 1872, de 8.095.000 has. Cf. Bonaudo, M., Sonzogni, E., Cragnolino, S., Albaizeta, M.E., “Ferrocariles y mercado de tierras en el centro-sur de Santa Fe (1870-1900)”, en *Siglo XIX, Cuadernos de Historia*, Monterrey, Año II, Nro. 6, junio de 1993

Ambas- convertidas en la vanguardia de la implantación de relaciones sociales capitalistas- aportan a la dinámica de una especialización productiva que gira en torno al cereal y el ganado como bienes exportables en el marco de la *división internacional del trabajo* pero altamente integrados al consumo interno. A su vez, reproduciendo en parte el habitat chaqueño, importantes áreas de la costa este y el norte combinan distintas formas de enclave latifundista azucarero y/o forestal en donde coexisten todavía la coacción extraeconómica junto a la experiencia salarial. Estas se integran diferencialmente al modelo agroexportador: si el azúcar encuentra rápidamente bloqueos para competir con ventajas en el mercado internacional y se vuelca al interno, los derivados de la madera como el tanino logran una exitosa articulación con la demanda externa en tanto los rollizos proporcionan un insumo básico para la extensión de redes ferroviarias y para la construcción.

Esta configuración obliga a preguntarnos cuán *homogéneo* resulta este espacio. Si lo analizamos desde el punto de vista de la *territorialización económica*, podemos afirmar que ésta está casi lograda en los noventa del siglo XIX. Si en cambio, pretendemos visualizarlo desde el universo de las relaciones sociales, éste muestra estrategias y resultados diferenciales. En tanto el mundo pampeano -al que se integra el centro-sur santafesino con una masiva presencia de la inmigración europea- es impulsado a producir fuertes cambios en esta dirección, en las realidades del ingenio o del obraje la implantación capitalista aprovecha la pervivencia de formas precapitalistas como elemento funcional a las lógicas del mercado, desalentando en consecuencia su desaparición drástica.

*B) las estrategias para desestructurar las formas precedentes de organización social fuerza*

#### *B1- El mundo indígena*

En relación con lo afirmado, el objetivo de este párrafo es mostrar cuáles son las formas precedentes de organización social que deben necesariamente desaparecer y en qué espacios estas estrategias obtienen resultados favorables. Un laboratorio propicio en esta dirección podría ser el denominado espacio pampeano en construcción para cuya consolidación resulta imprescindible operar sobre áreas que lo exceden.

En términos globales, para dicho espacio el imperativo de la nueva etapa es penetrar y desestructurar las relaciones preexistentes e imponer las pautas básicas del capitalismo. Esta imposición muestra dos caras. Por una parte, resulta imprescindible provocar la ruptura de las formas consuetudinarias de subsistencia que abstraían del mercado tanto al productor directo como a una fuerza de trabajo potencial. Por otra, incentivar el acceso de estos actores a un mundo del consumo crecientemente mercantilizado ¿ Quiénes van a generar estas modificaciones? Sin duda, los dos grandes demandantes de esa fuerza de trabajo y claros inversores en el campo de los servicios y de las mercancías: el Estado y los sectores empresariales.

En lo que respecta a la conformación de un mercado de trabajo, ellos perfilan distintas estrategias a ser aplicadas sobre la masa ya existente de potenciales trabajadores aunque irán apelando, frente a la clara carencia de brazos, a fomentar el ingreso de otros nuevos.

Es indudable que en la instancia de reorganización que sucede a la sanción de la constitución provincial, cobran proyección las medidas destinadas a incorporar y retener la fuerza de trabajo existente. Dos son los sectores hacia los que se orientan principalmente las políticas de disciplinamiento: las tribus indígenas y el mundo de los trabajadores criollos. Respecto de los primeros, el tratamiento elegido asocia a una fuerte carga de coerción,

mecanismos más consensuales tras objetivos de disciplinamiento para lo cual se apela a vías *naturales* de consenso: la escuela y la iglesia. Es por esto que Calchines, San Javier, Sauce, San Pedro son las experiencias piloto sobre las que se pretende ejercer su acción transformadora intentando recuperarlas para la *civilización*. Los indios reducidos son sometidos a la acción educativa y evangelizadora, estimulando el cambio de hábitos y la internalización de rudimentarios conocimientos de una agricultura de subsistencia y de otras destrezas domésticas. En 1859, el Gobernador Rosendo Fraga se enorgullece de los avances de la reducción del Sauce, donde los indios abipones reciben “los adelantos de la escuela establecida y los trabajos benefactores de la comunidad de misioneros...”<sup>24</sup> Cuando el éxito alcanza esa tarea de resocialización del aborígen- en el contexto normativo eurocéntrico- se instrumenta una segunda vía de integración. En no pocos casos, la siempre carente fuerza de milicianos aportados por el Estado Nacional o por los gobiernos provinciales en defensa de los cantones es auxiliada con lanceros provenientes de las propias reducciones<sup>25</sup>. Una tercer alternativa que combina las anteriores consiste en la erradicación de las parcialidades de sus lugares de asentamiento natural, trasladándolos a las ciudades de Santa Fe y Rosario. El objetivo es que se nombren comisiones de *gente de honorable reputación* a fin de distribuir a los indígenas entre familias que aseguren su efectiva educación<sup>26</sup>

El reconocimiento de los derechos básicos constitucionales, reputando a los *bárbaros depredadores* como *personas libres*, es fundamentado de manera todavía más consistente con otras lógicas similares. La preocupación por fundar pueblos para que en ellos habiten las tribus sometidas expresan la confianza en dos elementos centrales del orden a establecer: la propiedad y la familia.

Las reflexiones del jefe del Ejecutivo se orientan, en un sentido, a contraponer dos modelos societales: el que parece tener un carácter ancestral para los indios, cuya base de propiedad comunitaria tiene como contracara el retornar al *estado de naturaleza* y el que se propone desde *la civilización*, donde la propiedad privada asegura *la unión y el adelanto*. El enunciado discursivo tiene, no obstante, tremendos condicionamientos en su ejecución. A pesar de la decisión gubernamental de implementar esta política de radicación con reparto de predios en propiedad como estrategia de afincamiento, la carencia crónica de recursos obliga a reclamar - también en esta esfera - el aporte de los particulares. Los costos del progreso exceden largamente la capacidad económica de ese Estado, reiterándose, en consecuencia, durante esas primeras décadas la consecución de logros absolutamente limitados en esa dirección.<sup>27</sup>

## B2) Retener y fijar al criollo

A diferencia de un mundo indígena que termina quedando *encerrado* en estas diferentes estrategias, el universo de la población criolla aparece como altamente móvil, con niveles

---

<sup>24</sup> Mensajes ..., *op.cit.*, pág. 84

<sup>25</sup> El gobernador Fraga transmite a la Legislatura Provincial en 1860 que “el Gobierno ha podido remontar la guarnición de las fronteras... con 300 tiradores de a caballo...sin incluir en la cifra los lanceros de *Sauce* y *San Pedro*” *ibidem*, pág. 101

<sup>26</sup> *Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe*, 1886

<sup>27</sup> Mensajes..., *op.cit.*, págs.164 y235.

significativos de autosubsistencia, reticente a una incorporación sistemática al mercado y propensa a continuar rigiéndose por las pautas de la *costumbre*. Estas características entran rápidamente en conlisión con dos de los valores centrales del nuevo orden, el derecho de propiedad y el de trabajo. Esto conduce a que desde el poder y desde los grupos que pretenden hegemonizarlo, estos actores son percibidos como potenciales transgresores y *naturalmente* propensos a delinquir. Por eso comienzan a desplegarse acciones destinadas a terminar con los que se denomina como *cuatreritos* y *bandidos*, o *vagos* y *malentretidos*. Si bien todo el espacio rural carece de seguridades es el área reactivada del Rosario la que muestra las mayores preocupaciones por las condiciones de su campaña. En ella se reiteran las demandas orientadas a la persecución y desarraigo definitivo de estos grupos marginales, particularmente de los *vagos*. Sin embargo, las circulares de los Jefes de Policía a los Comisarios de Campaña resultan poco precisas inicialmente en la identificación del sujeto que debe ser retenido y disciplinado cuando de *vagos* de habla. No pocas veces, en la percepción de algunos dirigentes, el *vago* se asimila al pobre, perspectiva que crea inconvenientes y malentendidos en el control. Así, en 1855, aparecen varias solicitudes de los Comisarios dirigidas al Jefe Político del Rosario, reclamando mayores precisiones.

Estas vendrán de la mano de Nicasio Oroño, a cargo desde ese mismo año de la Jefatura Política de aquel departamento<sup>28</sup>. Oroño, elaborando el primer *Reglamento de Campaña* del período, pretende poner punto final a los perjuicios que originan *vagos* y *malentretidos* sobre la propiedad y la seguridad de la vida rural<sup>29</sup>. Para alcanzar tal objetivo, el funcionario sabe que es preciso articular los criterios coactivos con una legislación complementaria que ordene y garanta la propiedad rural tanto como el control y la eliminación de los circuitos marginales que obran como espacios potenciales de reproducción de esa fuerza de trabajo. Desde la función que ejerce, no resulta posible incidir en la regulación de la propiedad territorial, pero sí está en condiciones de bloquear la llegada de estos sujetos a mercados informales de intercambio de frutos de la tierra o productos robados. Es por eso que al tiempo que ordena el conchavo obligatorio para “todo individuo que no tenga profesión ni oficio ni ocupación conocida” y la portación de la *papeleta*, documento de control ante propietarios y comisarios; prohíbe la instalación de *pulperías volantes* e impone la exigencia de guías y pasaportes para ganados, venta de cueros y acarreo de animales salvajes<sup>30</sup>.

Tanto para la instancia departamental como provincial resulta imperativo retener esta mano de obra que se muestra tan reticente a aceptar las reglas que un mercado en construcción pretende imponerle. En realidad, cada administración sale a competir por ella con los empresarios rurales a medida que se acrecienta la demanda de hombres para las fronteras y para los diferentes emprendimientos públicos que comienzan a materializarse. Es por eso que quien viola las leyes de conchavo o atenta contra la propiedad en sus diferentes planos o altera el orden es obligado a engancharse en las Guardias Nacionales o a realizar trabajos públicos<sup>31</sup>. La competencia que el Estado asume frente al empresariado revela una asincronía aparentemente paradójica entre el proyecto de consolidar las lógicas del mercado tendencialmente *liberadoras* de la fuerza de trabajo y las urgencias de construir un territorio soberano que las garantice. Por eso, en principio, para unos y otros las estrategias

<sup>28</sup> Archivo de la Jefatura Política, 1855

<sup>29</sup> Archivo de la Jefatura Política, 1856

<sup>30</sup> Archivo de Jefatura Política, 1855

<sup>31</sup> Archivo de Jefatura Política, 1857

desplegadas en las áreas de frontera funcionan en dos sentidos: en tanto barreras ante la barbarie y como catalizadoras de la marginalidad y la pobreza<sup>32</sup>. Esta ambivalencia conduce a que mientras la frontera sea útil para neutralizar a los indeseables, el accionar gubernamental tendrá consenso y apoyo.<sup>33</sup> Sin embargo, resulta imprescindible definir, en relación con ella y con la seguridad en general, tanto la función de las levas en este proceso como el sentido de la incorporación de los infractores al espacio fronterizo<sup>34</sup>

La práctica del reclutamiento forzoso que no ha desaparecido con la crisis del rosismo<sup>35</sup>, intenta reproducir en el imaginario social y en la cotidianeidad su visión reformadora y disciplinadora en una sociedad convulsionada aún por los levantamientos militares, la guerra, los malones y el cuatrismo<sup>36</sup>. Esta perspectiva es compartida, sin duda, por algunos sectores<sup>37</sup> pero también aparecen niveles de disenso en la opinión pública que rechaza el bloqueo de las transformaciones que se quiere incentivar o intentos de replanteo de los alcances de la leva desde el propio ámbito gubernamental.

*La Capital*, el periódico rosarino que a partir de su creación viene señalando el impacto que sobre la ganadería tiene la escasez de trabajadores nativos “diezmados por el plomo paraguayo o en continuo cuartel”<sup>38</sup>, despliega críticos editoriales en torno de un servicio militar que permanentemente viola las condiciones de pago y el tiempo de retención de unos recursos humanos escasos y no fácilmente reemplazables por los europeos.

Para el periódico, esos enclaves de trabajo forzado que son el resultado del servicio de armas, operan como una rémora disruptiva en el proyecto de construcción de un nuevo orden. En definitiva, este supuesto lugar civilizador impacta negativamente sobre el mercado de trabajo, tanto en el ámbito rural como en el urbano y altera las condiciones en las que se presenta la oferta. Su escasez facilita los reclamos de jornales más altos estimulando asimismo demandas referidas a la práctica laboral.<sup>39</sup>

A los efectos perturbadores sobre el mercado, se suma la brutal incidencia que la coacción tiene sobre el goce de las garantías constitucionales:

“...Echemos ahora una mirada sobre el habitante de la campaña. Para éstos, las garantías

---

<sup>32</sup> Halperín Donghi,, Tulio, *op.cit.*, pág. 193. El autor remarca la fuerte presencia, en esta política de fronteras, de la tradición borbónica.

<sup>33</sup> *Confederación*, 14 de abril de 1865

<sup>34</sup> El gobernador Cabal duda de la constitucionalidad de la leva orientada al servicio de las Guardias Nacionales. Mensajes..., *op.cit.*, pág. 235

<sup>35</sup> Ver Salvatore, Ricardo, “Reclutamiento militar, disciplinamiento y proletarianización en la era de Rosas”, en *Boletín*, Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Buenos Aires, 1992, N°5.

<sup>36</sup> A partir del 80, el *Rosismo* (1880-1886) produce realmente la clausura de estas fuertes tensiones e inaugura una etapa conocida históricamente como de *Paz y Administración*.

<sup>37</sup> *El Ferrocarril*, 27 de enero, 1866

<sup>38</sup> 20 de junio, 1868

<sup>39</sup> *La Capital*, 22 de julio, 1868

son una quimera. Estos son víctimas de los comisarios, de los jueces de paz, de los tenientes alcaldes, y por fin del último bandido que ha logrado prenderse el sable de vigilante(sic) de partida. He ahí todos los tutores que los gobiernos nombran para el pobre pastor o labrador. Una respuesta poco atenta dada a un juez de paz por uno de nuestros hombres de campaña cuando a éste se le cita para una elección o para servicios de patrulla, es una sentencia de persecución que acaba por destinarlo a la frontera o a un cuerpo de línea”<sup>40</sup>

El editorialista deja al descubierto no sólo el desenlace del acto coactivo, sino también la fuerte articulación que se establece entre autoridades civiles y militares para concretarlo. En los hechos, esta vinculación del poder judicial y la fuerza policial, de la que participan frecuentemente los comandantes de campaña, otorga a las autoridades un alto margen de discrecionalidad en sus procedimientos. En vista de tal situación, comienzan a multiplicarse desde los sectores empresariales pedidos de modificaciones de las normas existentes. A través de Guillermo Perkins, interesado observador de las estrategias modernizadoras, reclaman en 1863, la sanción legislativa del reglamento de campaña, elaborado por el entonces diputado Nicasio Oroño<sup>41</sup> para responder a una cuestión básica como es la formalización de reglas claras para el espacio rural.

### *b3) El camino hacia la codificación*

Un primer paso en esta dirección es, sin duda, llevar a cabo un verdadero reordenamiento de la policía de campaña para hacer frente a la “relajación de las mazas(sic)”<sup>42</sup>. Más allá de elaborar estrategias destinadas a favorecer la creación de puestos policiales y la multiplicación de las partidas volantes, se detecta una enorme dificultad tanto para aprovisionarlas adecuadamente, asegurándoles su paga como para encontrar en esos recursos humanos garantías de idoneidad, educación y condiciones morales<sup>43</sup>. Frente a estas restricciones, los gobiernos acuden a sectores representativos de la campaña y apelan a mecanismos para involucrarlos directamente como es la designación de Comisarios entre “ciudadanos domiciliados y con intereses rurales, que no pueden menos de tener vigilancia hasta por sus propias conveniencias”<sup>44</sup>. Una alternativa es la conformación de una representación de hacendados “para asistir a la autoridad en las buenas obras de reglamentar la campaña y garantizar la propiedad”<sup>45</sup>. El gobierno responde así a quienes pretenden recrear una experiencia exitosa en el ámbito bonaerense de la década del 50 por medio de la cual, los propios interesados convenían reglas para la contratación de peones, la persecución de vagos, la fijación de criterios y *costumbres* de trabajo, etc.<sup>46</sup>

Un segundo nivel de decisiones a adoptar se refiere a la elaboración de normativas en torno a lo que se consideran las aristas policiales del problema rural, así como a aquéllas

---

<sup>40</sup> *La Capital*, 10 de abril, 1870

<sup>41</sup> *El Ferrocarril*, 6 de agosto, 1863

<sup>42</sup> Mensajes... *op.cit.*, pág. 99

<sup>43</sup> Se suspende “el rancho y los vicios de entretenimiento” *Registro Oficial*, 1863, pág. 31

<sup>44</sup> Mensajes de Gobernadores, *op.cit.*, pág. 99

<sup>45</sup> *La Confederación*, 7 de abril, 1860.

<sup>46</sup> Fradkin, Raúl, “Entre la ley y la práctica: la costumbre en la campaña bonaerense de la primera mitad del siglo XIX”, en *Anuario*, Instituto de Estudios Histórico-Sociales, Universidad Nacional del Centro, Tandil 1997.

atinentes a la regulación del trabajo, los intercambios y el afianzamiento del principio de propiedad. Las respuestas a tales inquietudes se plasman en el *Reglamento de Policía Urbana y Rural* (1864) y el *Código Rural* (1867), réplica del ya existente en Buenos Aires. Los dos instrumentos plantean prioridades tanto en el ámbito de la propiedad como en el campo laboral. En el primero, la intención explícita es modificar las prácticas consuetudinarias confirmando un único y exclusivo derecho de propiedad asentado sobre parámetros de privacidad y plenitud. En lo que al mercado de trabajo rural se refiere, establecen criterios homogéneos para la captación de la fuerza de trabajo remisa, legitimando la coerción. Asimismo, universalizan las reglas que, en adelante, regirán las relaciones laborales entre peones y patrones.

Las instancias policiales (Jefes de Policía y Comisarios Generales) asociados a la Justicia de Paz se encargan de la fuerza de trabajo en tránsito o incapaz de comprobar su condición laboral. La policía es reponsable del registro actualizado de *peones y sirvientes a jornal*, proporcionándoles sus respectivas papeletas de ocupación<sup>47</sup>. Esta herramienta es, en realidad, el parteaguas en el mundo del trabajo, entre la legalidad y la ilegalidad. Todo individuo que circula o transita es colocado bajo sospecha, debiendo presentar obligatoriamente el contrato o boleto de conchavo, so pena de ser catalogado y demás ulteriores, como vago. Igual criterio se aplica en el caso de que el personaje que deambula intente acreditar su pertenencia a tropas de línea o milicias, sin portar las licencias o pases pertinentes<sup>48</sup>. En el Reglamento se advierte una más lograda definición de la vagancia. La posterior sanción del Código Rural exhibe algunas novedades con respecto al precedente. Mientras en el Reglamento de Policía el concepto de vagancia aparece prácticamente como la contrafigura del valor que se pretende internalizar, el trabajo, el Código refuerza el prejuizgamiento, al asociar la carencia de aquel valor con una inevitable predisposición delictiva. Quien no posee domicilio fijo y medios conocidos de subsistencia, se inclinará naturalmente hacia el vicio<sup>49</sup>. Esta condición coloca al margen de la legalidad a estos sujetos que se hacen pasibles inmediatamente del estigma de su peligrosidad. En estas tempranas etapas de instalación del modelo capitalista, en las que todavía no ha penetrado el discurso y la práctica higienista ni el desarrollo de la criminología positivista, el recurso al que se apela es simplemente el punitivo<sup>50</sup>. A diferencia de lo que parece plantearse en el mundo urbano en donde la gestión política combinada con la acción de los particulares desarrolla prácticas de *asistencialidad pasiva* hacia pobres y mendigos, en el ámbito rural en el cual resulta imprescindible erradicar la *inactividad voluntaria* se planifican formas operativas de inserción por el trabajo. Las colonias indígenas y de fronteras, en las que comparten el espacio vagos, malentretidos y menesterosos, expresan el afán disciplinador con una doble finalidad: la internalización de valores y la retención forzada de los sujetos. En la medida en que lo que se pretende afianzar es aquella concepción, las condenas remiten como vía de recuperación a una integración compulsiva en la esfera laboral,

---

<sup>47</sup> *Reglamento de Policía Urbana y Rural de la Provincia de Santa Fe*, Imprenta Carrasco, Rosario, 1882, pág. 20.

<sup>48</sup> *Ibidem*, pág. 43.

<sup>49</sup> *Código Rural de la Provincia de Santa Fe*, Imprenta Nueva Epoca, Santa Fe, 1886, pág. 53

<sup>50</sup> Ver Ruibal, Beatriz, "El control social y la policía de Buenos Aires. 1880-1920", en *Boletín, op.cit.*, 1990, N°2.

(servicio de armas, trabajos públicos, prestaciones en las fronteras).

Otros matices diferenciales se observan en la consideración del universo del trabajo. Mientras en la definición de la relación laboral el Reglamento hace privar el costado punitivo, en el Código Rural prevalece el criterio de contractualidad, asentando el vínculo sobre bases más racionales en la clave de un intercambio entre iguales. Con tales objetivos no solamente están definidos los roles de patrones y peones sino que se estipulan las pautas que debe reunir el contrato escrito indicando el tipo de trabajo al que se lo destina, el tiempo, las remuneraciones y los intervalos de descanso. Una excepción a la regla parece ser la del *agregado* cuyo status, si bien es legitimado, lo ubica en una condición de inferioridad ya que el propietario aparece como subsidiariamente responsable en el plano civil de delitos o causas en que aquél se vea involucrado. Evidentemente aquí el Estado- a través de los funcionarios judiciales y policiales- interviene claramente en las relaciones privadas. Dicha intervención se hace notoria en el articulado referido a la regulación del control de la mano de obra, especialmente aquélla de carácter itinerante; a las garantías que se otorgan para el mantenimiento del vínculo contractual, particularmente en épocas de mayor demanda, como la cosecha o la esquila y al relacionado con la conflictividad entre patrones o entre éstos y sus peones. Respecto de esto último, dos conflictos parecen ser los habituales en el mundo rural: el que enfrenta, dada la escasez crónica de mano de obra, a unos empleadores con otros, generando situaciones de competencia *desleal* y el que se desata entre los trabajadores conchavados o a destajo con el patrón, ya sea por incumplimiento de las cláusulas contractuales, ya por su transgresión, ya, en fin, por su desconocimiento de los valores básicos que se suponen vigentes en esa sociedad: obediencia, laboriosidad y virtud<sup>51</sup>.

En la última década de nuestro análisis, se ha avanzado en la consolidación de las relaciones capitalistas y resultan más evidentes aquellos desajustes. Desde la retórica liberal, aparecen entonces algunas voces que apelan a fundamentos emanados del derecho civil para cuestionar el anacronismo de cierta normativa presente en los reglamentos policiales y en la codificación rural que colocan en calidad de delito el incumplimiento de contratos civiles, tales como los que se establecen entre patrón y peón.<sup>52</sup> El propio Código Civil, que ya rige desde 1871, al instalar este tipo de contratos en el marco de la *locación de servicios*, refuerza el carácter consensual de un intercambio entre sujetos *equivalentes*.

Este proceso de *homogeneización* no deja de evidenciar dificultades, contradicciones, desajustes y asimetrías en los ritmos de los cambios deseados que muestran con claridad el carácter transicional de la coyuntura y los obstáculos que persisten para la concreción de los derechos individuales, la independencia de los actores y el reconocimiento de su autonomía e igualdad. Aunque las formas contractualistas avanzan ya sea a través de la pseudocodificación rural o del Código Civil, las prácticas de los agentes que debieran garantizarla, la persistencia de rasgos paternalistas, la tensión entre formas *liberadoras* y coactivas y la fuerte injerencia del Estado en el marco de relaciones privadas postergan la concreción de la premisa clásica acerca de la autoregulación en la *sociedad de mercado*.

*B4) La pulpería como espacio paradigmático donde moralizar al trabajador y potenciar al consumidor*

---

<sup>51</sup> *Código Rural*, op.cit., pág.44.

<sup>52</sup> *Reglamento*, op.cit., pág. 43,44



La codificación precedente y las prácticas orientadas a producir a este nuevo actor ligado al mercado tanto como productor cuanto como consumidor invaden otras esferas en las que se condensan ambos perfiles. Entre todas ellas hemos elegido como arquetipo de esta experiencia el lugar de la pulpería como el ámbito donde este tipo de trabajador criollo encuentra su *natural* espacio de sociabilidad y de intercambios al que también se van a integrar indios y extranjeros.

Tanto el Reglamento como el Código, en su afán disciplinador y moralizante extienden la prescriptiva al goce del tiempo libre, señalando los límites admisibles y controlando los espacios en los que debe desarrollarse. El Reglamento de Policía aborda estos problemas legislando sobre las actividades o prácticas insumidas en el tiempo de ocio, en tanto el Código Rural sienta jurisprudencia sobre el contexto espacial de su ocurrencia, fundamentalmente definido como el de las *pulperías volantes*. En lo referido a las diversiones lícitas e ilícitas, el Reglamento expresa contundentemente la prohibición del juego del pato, deporte evidentemente ligado a las tradiciones culturales de los trabajadores criollos y pone bajo control otras prácticas, vinculadas también a ese mismo legado, como las carreras de caballos, los reñideros de gallos o los bailes y festejos que clausuran una actividad estacional de envergadura como la yerra o la cosecha<sup>53</sup>

El fundamento ideológico que subyace a estas formulaciones es el deseo de desestructurar la simbiosis entre el trabajo y la vida, típica de las comunidades campesinas donde el capitalismo aún no ha estampado su impronta. El objetivo es desalojar la noción de un tiempo que pasa sin apremios, entronizando la concepción de que aquél equivale a dinero y por lo tanto, debe ser gastado productivamente<sup>54</sup>. El lugar prototípico donde se dilapida es, sin duda, la pulpería, multiplicada en todo el territorio, a través de las tiendas o boliches movibles. Esta es vista desde la autoridad como el ámbito potenciador de duelos, pependencias, embriaguez y desorden y en consecuencia se intenta reglamentar las condiciones y horarios de su funcionamiento.

En realidad, estos recintos constituyen un doble peligro para la moral burguesa que se insiste en imponer: en su calidad de ámbitos de esparcimiento pueden propiciar el desenfreno; pero también, en tanto sedes de transacciones, pueden favorecer los intercambios clandestinos, coadyuvando a la perduración de circuitos marginales.

En esta segunda dirección, la preocupación no se detiene en el hecho de que este actor negocie bienes mal habidos no resultantes del fruto de su trabajo. Además se pretende coartar la autosubsistencia generada a través de estos intercambios y obligarlo a adquirir tales bienes en su calidad de mercancías.

Tanto el Reglamento como el Código, en la búsqueda de la preservación del derecho de propiedad de tierras y haciendas pero también de la reafirmación de la mercantilización de los bienes de la naturaleza, estipulan con mayor rigurosidad la prohibición de la caza furtiva, su venta, así como la de los productos espontáneos del suelo<sup>55</sup>. En otro orden de cosas, imponen a los pulperos la obligación de justificar la procedencia de cueros por

---

<sup>53</sup> *Ibidem*, págs. 53,54

<sup>54</sup> Thompson, E.P. , *Tradición, revuelta y conciencia de clase*, Editorial Crítica, Barcelona,1979, pág.245.

<sup>55</sup> *Código Rural*, op.cit., pág. 47

compra o permuta, con los correspondientes certificados o guías<sup>56</sup>. Entre sus cláusulas fundamentales figuran: a) la identificación del bien intercambiable (origen, propiedad, características, marcas o señales, etc.); b) la matriculación de los portadores (acarreadores, abastecedores, buhoneros, pulperos, acopiadores, etc.); c) las formas adoptadas por la transacción (trueque, permuta, compra); d) el papel de contralor de los funcionarios provinciales o municipales así como su capacidad jurídica para aplicar sanciones ante la violación de la norma. El instrumento legal preve una tarea cooperativa entre funcionarios civiles y policiales, quedando estos últimos a cargo de los procedimientos.

En la misma dirección, figuran las disposiciones que penan el abijeato<sup>57</sup>, ordenando la permanente realización de rodeos para dirimir la propiedad del ganado, asentando la obligación de marcas, contramarcas y señales<sup>58</sup>. En consecuencia, tal como lo destaca un funcionario nacional- el inspector Wilcken- este ámbito no sólo está cargado de negatividad para ese mundo de trabajo en construcción por sus interacciones en paralelo a las del mercado. Una de sus preocupaciones centrales es que “la sociedad de la pulpería, de la embriaguez y la pendencia” de la que participan indios y criollos puede convertirse en un foco de contaminación para ese recién llegado que es el inmigrante sobre el cual se ha depositado una esperanza *regeneradora*.<sup>59</sup>.

*C) Entrar al mercado utilizando la población excedente de las áreas centrales; Rol del Estado o del mercado?*

*C1) El proyecto mirado desde la iniciativa estatal*

En la búsqueda de la superación del estancamiento que caracterizó la sociedad santafesina en la primera mitad del siglo XIX y simultáneamente a las medidas tendientes al disciplinamiento social, las administraciones provinciales colocan en el aporte inmigratorio todas sus expectativas: el será en primer término, el protagonista de una verdadera transformación productiva, el fondo de reserva de fuerza de trabajo y fundamentalmente, el portador del ideal civilizatorio que venza la barbarie.

Tal vez la figura que resume con mayor claridad los sustentos del modelo fuertemente ligado a la inmigración es la de Nicasio Oroño. Desde su visión de estadista, aun avanzados los 70, reconoce que el Estado santafesino tiene todavía asignaturas pendientes (justicia, paz, educación, etc.). Sin embargo, considera que las sucesivas gestiones, más allá de los matices, admitieron la premisa fundamental del valor de la inmigración como vehículo de desarrollo y de renovación cultural. Este análisis está fuertemente vinculado a una concepción que encuentra en la tierra y en la orientación agrícola de su explotación una verdadera función civilizatoria<sup>60</sup>. En esta dirección, ve al Estado como el gran artífice de

---

<sup>56</sup> *Código Rural*, op- cit., pág.56

<sup>57</sup> *Código Rural*, op.cit., pág.39

<sup>58</sup> *Código Rural*, op.cit., pág. 8,9

<sup>59</sup> Wilcken, Guillermo, *Las Colonias: Informe sobre el estado actual de las colonias agrícolas de la República Argentina*, Imprenta Oficial, Buenos Aires, 1873, pág.307

<sup>60</sup> Halperín Donghi, Tulio, “¿ Para qué la inmigración?. Ideología y política inmigratoria en la Argentina(1810-1914)” en Tulio Halperín Donghi(ed) :*El espejo de la historia*, Buenos Aires; Sudamericana, 1987, pág. 192,193.

<sup>61</sup> Mensajes de Gobernadores, *op.cit.*, pág. 40

<sup>62</sup> Wilcken, *op.cit.*,pág. 318

los procesos de enajenación de la tierra pública, otorgada en parcelas pequeñas o medianas, a precios fijos, módicos y a largo plazo. El objetivo es transformarla en una verdadera mercancía y no simplemente en un factor para incrementar las arcas fiscales:

“La tierra inculta, sin el auxilio del capital y del trabajo del hombre, es un valor muerto, es una materia prima que nada vale aunque pueda valer...La tierra vale por lo que produce, por el capital que representa”<sup>61</sup>

En Oroño aparece muy presente la visión sarmientina de asignar al protagonismo estatal las funciones de subdivisión y entrega de la tierra pública, el desarrollo cerealero y la conformación de una burguesía agraria en la que adquieran fuerte representatividad los pequeños y medianos propietarios, proyecto que no discrimina a los productores criollos.

Desde otros agentes gubernamentales así como desde ciertos grupos empresariales se pretende atemperar el protagonismo del Estado. No pocos consideran que éste debe reducir su acción a la de proveedor de una tierra barata, estimulando su uso agrícola. La mayor divergencia se detecta en las vías de instrumentación del propio proceso colonizador. Algunos funcionarios nacionales y ciertos publicistas reconocen la necesidad de un trabajo eficiente del Estado a través de sus legaciones consulares en Europa, como herramienta fundamental para promover la inmigración y garantizar a los recién llegados - a través de organismos especiales- los apoyos imprescindibles para su instalación definitiva. El accionar de las Comisiones de Inmigración, del Ministerio de Gobierno en las décadas del 60 y 70 va a ser sistematizado con la sanción de la Ley de Inmigración (1876). Pero la mayor discusión se centra en torno a si el Estado debe o no comprometerse directamente con “ el negocio de la inmigración o colonización por cuenta propia”<sup>62</sup>

La experiencia de dos décadas impulsa a algunos legisladores como Estanislao Zeballos, a desestimar lo que denomina *colonización oficial* porque el Estado no sólo carece de recursos humanos y administrativos idóneos sino que además no tiene la capacidad para :

“elejir(sic) los inmigrantes, para la preferencia de las tierras y de su posición, para la dirección sucesiva de los colonos y para el manejo de los caudales aplicados a su fomento”<sup>63</sup>

Diez años antes, el Inspector de Colonias Guillermo Wilcken no sólo había alertado en torno a estas limitaciones sino que apuntaba a otro peligro mayor que residía en las obligaciones y responsabilidades que el Estado nacional o los provinciales asumirían en estas circunstancias, quedando sujetos a potenciales controversias internacionales cuando no lograran hacerles frente. En cambio, Wilcken compartía con Oroño la visión de un Estado promotor y supervisor que no dejara en manos exclusivas de los particulares el problema de la inmigración. Mientras en Oroño priva la preocupación por las desviaciones que la sujeción del colono a las empresas produciría sobre el paradigma *farmer*<sup>64</sup>, el Inspector Nacional de Colonias enfatiza sus prevenciones sobre las distorsiones que en el fenómeno colonizador pueden generar otras prácticas del mercado. Para Wilcken, ni los armadores de buques que buscan pasajeros para el Río de la Plata, ni las agencias

---

<sup>63</sup> Zeballos, Estanislao, *Descripción amena de la República Argentina*, Vol.2, *La región del trigo*, Imprenta Jacobo Peuser, Buenos Aires, 1883, pág. 242

<sup>64</sup> Oroño, Nicasio, *Escritos y Discursos*, Librería La Facultad, Buenos Aires, 1920, pág. 34

<sup>65</sup> Wilcken, *op.cit.*, pág. 316

<sup>65</sup> Más que una actitud hostil, esto revela expectativas colocadas en la población extranjera y explica la prohibición de vender los predios a los habitantes del país.

vinculadas a las empresas colonizadoras están interesados “en el origen, naturaleza y condiciones” de los emigrantes. Estos rasgos resultan relevantes si de lo que se trata es el fomento de una población agrícola con aptitudes y conocimientos cuyos cimientos se dan en el núcleo familiar. El funcionario se muestra partidario de combinar criterios en cuanto a la conformación de los dos mercados de trabajo, el rural y el urbano. Para este último, considera operativa la llamada *inmigración espontánea*, que trae generalmente hombres solos, escasamente capacitados y cuya condición “los habilita para cualquier ocupación de peonaje”<sup>65</sup>. Para el primero, en cambio, propone la vía de la *inmigración artificial*, limitando el compromiso básico del Estado a garantizar el acceso a la propiedad. Tales argumentaciones parecerían traslucir una percepción de la ciudad como la sede por antonomasia de las leyes del mercado que autoregulan las relaciones cualquiera sea la calificación de la fuerza de trabajo que se vende. Por el contrario, el proyecto de colonización agrícola requiere la intervención de la entidad estatal para la selección de los futuros trabajadores la cual debe garantizar la calificación laboral articulada a una valoración ética. Con mayor énfasis que Zeballos, vuelve a reafirmarse la pretensión de potenciar un flujo migratorio que asegure el surgimiento y la expansión de las capas medias rurales.

#### *C2) La fuerza de trabajo subordinada al interés empresario*

El ideario estatal se redefine desde la óptica empresarial, particularmente en las experiencias que se materializan entre los ‘50 y los ‘70. En primer lugar, como bien lo señala Guillermo Perkins, posteriormente vinculado a la Compañía de Tierras del Central Argentino, la colonización debe ser entendida como un nuevo ámbito de *especulación comercial* y, por ende, permitir una maximización de los beneficios. En virtud de ello, la preocupación de los inversores no reside en promover exclusivamente la emergencia de una pequeña y mediana burguesía agraria<sup>66</sup>. Esta parece ser solo una de las estrategias a desarrollar, particularmente al calor de las presiones gubernamentales o de ciertos sectores de la opinión pública pero puede coexistir sin contradicciones con la gran propiedad, generadora de otras relaciones sociales como el peonazgo, el arrendamiento y/ o la mediería, o bien sus combinaciones. Tampoco son ajenas a esta realidad, los intentos de retener a la fuerza de trabajo, utilizando los mecanismos del endeudamiento.

Sobre este diseño de los inversionistas, se superpone la propia realidad de los inmigrantes. En el contexto de una convocatoria a familias agricultoras que reúnan de tres a cinco miembros adultos, se despliegan diversas modalidades cuando el propio grupo no puede dar respuesta a la consigna. De este modo, junto al cabeza de familia, el contrato incluye la presencia de asociados en paridad de condiciones o con participaciones proporcionales. En otros casos, los colonos con cierto patrimonio inicial cubren los gastos de viaje de connacionales a los que incorporan en calidad de peones. Este acuerdo implica, a veces, una relación salarial corriente; otras, un vínculo a término que concluye al saldar la deuda pero que obliga al patrón en ese lapso, a la manutención y alojamiento. El lugar del peón puede ser ocupado por hombres o mujeres en edad activa que trabajan en el servicio doméstico<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup>Ver Bonaudo, Sonzogni, Cragnolino, Albaizeta, *op.cit.*, págs. 53, 54

<sup>67</sup> Gori, Gastón, *Colonización suiza en la Argentina: colonizadores de San Carlos hasta 1860*, Santa Fe, 1947, págs. 69, 87

En los convenios que los empresarios suscriben con el Estado, éste se obliga a la cesión gratuita o a bajo precio del fondo territorial sobre el que se diseñará la colonia.<sup>(9)</sup> En oportunidades exige a las compañías, como en el caso de San Carlos, poblar con familias “escogidas escrupulosamente en Europa”<sup>68</sup>. Las otras responsabilidades a cargo de las empresas, se limitan a solventar los gastos de pasaje, instalación y mantenimiento de los colonos durante un lapso que puede extenderse hasta el año. Esta deuda se salda en diversos plazos según los contratos; en cambio, las obligaciones relativas a la adquisición del predio, se amortizan con intereses en un período que puede alcanzar hasta los cinco años desde la instalación<sup>69</sup>.

Entre todos los ensayos de colonización que se reproducen hasta entrada la última década del siglo, la propuesta de Beck y Herzog para San Carlos parece exhibir un mayor grado de organicidad. En este caso, la Empresa asocia el nivel de rentabilidad a su capacidad de retener a la fuerza de trabajo e incrementar la productividad de las concesiones, obteniendo en el plazo más breve, la recuperación del capital y los beneficios esperados de tamaño inversión. Para ello, la sociedad parte de una selección previa de las familias a las cuales se aplicará una normativa clara y estricta. El Reglamento que acompaña el contrato que suscriben los colonos, convierte el emprendimiento en una gran propiedad puesta en producción por una mano de obra extranjera sobre la que se ejerce una fuerte dosis de adscripción personal. De este modo, el conjunto de cláusulas genera una tutela restrictiva: se coarta la libre movilidad, se impide el acceso directo al mercado para vender los excedentes y aún la posibilidad de disponer sin controles de la cosecha; se supervisa la capacidad para establecer vínculos contractuales con peones; se sujeta a los colonos a la ejecución de “trabajos públicos” que pueden insumir hasta veinte días por año, etc.<sup>70</sup> Pero la injerencia de la Administración excede la esfera estricta de las relaciones de producción y de realización de las mercancías para extenderse a un conjunto de libertades individuales y al goce del tiempo libre. Sus atribuciones alcanzan las prácticas religiosas, la consagración del matrimonio civil, la tutela y asistencia de huérfanos y viudas, la definición y castigo de los delitos, la aplicación de leyes de vagancia, llegando incluso a la expresa prohibición de la actividad política.

Esta base organizativa se cumple a través del equipo de administradores permanentemente atentos a los ritmos de trabajo, las prácticas societales e incluso los avatares en la vida privada de los colonos. El celo y la marcada supervisión que se desprende de esta operatoria no alcanza, sin embargo, a garantizar la supervivencia de la *especulación comercial*. Cinco años después de la fundación de la Colonia, la Beck y Herzog entra en un proceso de liquidación, siendo sustituida por una nueva sociedad por acciones del mismo origen que afronta la conclusión de la experiencia con otras perspectivas. Su campo de acción se inscribe en el de todo negocio inmobiliario rural, subdividiendo y vendiendo las parcelas a plazos y con el interés corriente en el mercado. Tanto las nuevas fundaciones que ésta concreta- Humboldt y Las Tunas - como las llevadas a cabo en otras áreas se alejan totalmente de los criterios adscriptivos aun cuando también deben resolver problemas tales como el de la retención de la fuerza de trabajo o el del

---

<sup>68</sup> Más que una actitud hostil, esto revela expectativas colocadas en la población extranjera y explica la prohibición de vender los predios a los habitantes del país.

<sup>69</sup> Para hacer frente a la deuda, miembros de la familia entran en servicio en las administraciones de las empresas; otros se conchaban en calidad de asalariados con otros productores; algunos alternan actividades rurales con artesanales, etc.

<sup>70</sup> Archivo de la Colonización de San Carlos,s/f.

endeudamiento. Los mecanismos a los que se apela resultan más coherentes con las pautas normales del capitalismo, actuando como incentivos de la competencia interempresarial a través de ofertas más atractivas para los potenciales compradores. En esta dirección, la Beck y Herzog había sufrido los mayores embates de sus rivales en la costa este santafesina o en la vecina provincia de Entre Ríos. Hacia allí huían o se desplazaban familias de colonos en procura de mejores condiciones laborales y de un más fácil acceso a la propiedad<sup>71</sup> De igual manera, la cuestión de la deuda se resuelve sustituyendo los pagos en especie, modalidad vigente en Esperanza y San Carlos, por cuotas en dinero<sup>72</sup>. Paralelamente, se acude a otras prácticas cuando persisten las dificultades de pago: la reconsideración de los términos contractuales, la renovación de los plazos regulados con una nueva escala de intereses, el embargo y la retroventa. La universalización de estos criterios que pretenden favorecer el horizonte de la propiedad no quita que aún avanzada la década del 80 perduren ciertos resabios de discrecionalidad por parte de algunas empresas, en las que, como en el caso de Lehmann, los empresarios combinan el rol específico de inversores con el control estratégico de funciones públicas, particularmente la justicia de paz.<sup>73</sup>

Un segundo cuerpo de cuestiones emanadas del ensayo colonizador se refiere al imaginario forjado respecto de la población convocada. La visión de estos nuevos actores como partícipes de un proceso de regeneración social a través de la agricultura, comienza a ser matizada, a medida que se detectan ciertos desajustes. El primigenio arquetipo que presentaba al inmigrante como portador de nuevas fuerzas morales, hábitos de laboriosidad y ahorro, mejores formas de sociabilidad, valores todos que llegarían a transformar las atávicas costumbres de la población nativa es rediscutido. Esta rectificación deriva fundamentalmente de las características que ostenta la masa humana que ingresa al país. Para Perkins, por ejemplo:

“Casi todas estas familias fueron indijentes(sic) en sus países, peones, soldados y una clase aún peor, criminales. Estos nunca podrían haber abrigado la esperanza de levantarse más arriba de simples jornaleros en Europa”<sup>74</sup>

Esta descalificación es compartida por el funcionario Wilcken, quien supone que las condiciones previas de vida, donde todo el esfuerzo ha sido puesto en el objetivo de garantizar la supervivencia, afectan a estos colonos en su capacitación y en el despliegue de su sociabilidad.

Desde temprano es puesto en cuestión el grado de adiestramiento que para la práctica agrícola poseen estos trabajadores. Contrariamente a la percepción que rige el mundo ganadero, en donde la mano de obra, fundamentalmente criolla, aparece dotada con habilidades *naturales* para las actividades específicas, el escenario agrícola presupone estrategias formalizadas de capacitación y entrenamiento. Esta presunción surge de cierto diagnóstico de la situación. Por una parte, porque un sector considerable de los supuestos agricultores, no es tal, y, en segundo lugar, aún siéndolo, las dificultades emanan del desconocimiento del habitat, de sus condiciones climáticas y de los particulares ritmos del

---

<sup>71</sup> Entre los principales competidores se encuentran Alejo Peyret, colonizador en Entre Ríos y el médico Teófilo Romang de Esperanza, quien sustrae buena parte de los colonos hacia Helvecia.

<sup>72</sup> *El Ferrocarril*, 17 de diciembre, 1863

<sup>73</sup> Sonzogni, Elida. “Un emprendimiento weberiano en el espacio colonial. La empresa Lehmann de Esperanza, 1870-1886”, *Anuario*(Rosario: Escuela de Historia Facultad de Humanidades y Artes Nº 17, 1996, pág. 277.

<sup>74</sup> *El Ferrocarril*, 15 de diciembre, 1863

ciclo agrícola en el hemisferio<sup>75</sup>. Los años posteriores modifican escasamente el balance. En 1872, evaluando el estado general de las colonias en el país, el Inspector Wilcken afirma:

“Diminuto es el número de los que entre nuestros colonos puede llamarse un agricultor de profesión antes de llegar al país; y muchos de los que hoy dedican sus esfuerzos e inteligencia a esta noble industria, no conocieron al principio ni siquiera el modo de manejar la pala y servirse de la azada, cuanto menos del arado; de esto resulta, que, el modo de cultivar la tierra apesar(sic) de la perfección de los instrumentos con que se inician, es rudo, atrasado y primitivo”<sup>76</sup>

Para superar las trabas que plantean ambas situaciones, el empresariado y los funcionarios elaboran diferentes estrategias. Los primeros acuden a la instalación de granjas modelos que cumplen un doble cometido: ser un laboratorio de experimentación y consecuentemente de adquisición de conocimientos y, al mismo tiempo, un referente testigo para el control de la productividad<sup>77</sup>. En cuanto a la gestión política, las propuestas van desde la elaboración de materiales de asesoramiento(cartillas, manuales de agricultura) hasta una formación más específica de los estudios elementales, proyectando escuelas de agricultura. Así, en 1885, el Gobernador Zavalla reclama al Congreso que arbitre los recursos necesarios a fin de concretar establecimientos de este tipo en Esperanza, San Carlos y Cañada de Gómez, para que en el futuro los hijos de los agricultores no reproduzcan “las mismas huellas y añejas prácticas de sus padres en la preparación y cultivo de la tierra”<sup>78</sup>

Concomitantemente, avanzando en el terreno de la resocialización, desde ambos sectores se estimulan todas aquellas iniciativas y ámbitos institucionales que aseguren la consolidación de una visión eurocéntrica de la cultura y su consecuente proyección. De este modo, se arraigan en las colonias las asociaciones de ayuda mutua, las escuelas étnicas, las iglesias de culto católico y protestante, las sociedades de canto, de tiro al blanco, etc.

### **A modo de reflexión final**

Las páginas anteriores tienen la intención de poner en diálogo las visiones clásicas del liberalismo económico con los procesos históricos acontecidos en un área de la “región pampeana”, examinando particularmente aquéllos que conducen a la apropiación privada de la tierra y a la integración de un conjunto de actores a un mercado de trabajo. Esta perspectiva permite observar y comparar las estrategias elegidas por los dos actores que se asumen como los principales artífices de esa *sociedad de mercado*: el Estado y los empresarios, pero también las peculiaridades que adoptan los modos de construcción de un orden burgués en ese escenario de la realidad pampeana. Tanto en el proceso de *territorialización* de la economía como en el de sostenimiento y/o transformación de relaciones precedentes o bien la creación de nuevas se gestan situaciones híbridas. Las lógicas de un empresariado que funciona aún con los parámetros del capital mercantil no necesariamente se orientan a integrar el capital a la producción ya que no pocas veces este tipo de objetivos queda bloqueado frente a la especulación y la búsqueda de una realización rápida de la ganancia, con bajos riesgos y apoyándose en subsidios o beneficios colaterales proporcionados por el Estado. La injerencia de este último, a partir de sus recurrentes dificultades financieras y burocráticas, no siempre está motivada por marcar directivas

---

<sup>75</sup> *El Ferrocarril*, 19 de noviembre, 1863

<sup>76</sup> Wilcken, *op.cit.*, pág. 276

<sup>77</sup> Gori, *op.cit.*, pág. 119

<sup>78</sup> Mensajes de Gobernadores, *op.cit.*, pág. 189

políticas orientadas a afianzar el juego de un mercado autoregulado. No tiene tal propósito el modo en que va desprendiéndose del fondo territorial tan arduamente recuperado. Tampoco la dinámica que imprime a sus acciones en el proceso de constitución de un mercado de trabajo con pautas capitalistas. En no pocas oportunidades, sus tomas de decisión favorecen las demandas individuales o colectivas de esos grupos burgueses y avanzan sobre fórmulas restrictivas o incluso coactivas en lugar de *liberalizar* a la fuerza de trabajo, retrotrayéndola a condiciones de fuerte dependencia. En otras, de la mano de un proyecto *modernizador*, suscribe todas aquellas acciones políticas destinadas a incrementar la llegada al mercado de nuevos trabajadores. Pero este flanco modernizante no limita los excesos de un empresariado que en pos de sus beneficios, se arroga incluso roles públicos para condicionar y disciplinar a tales trabajadores. Si en ciertos niveles el mercado muestra el libre juego de la oferta y la demanda, en otros es el Estado el que realmente regula la oferta, particularmente en estas esferas, dado que los estímulos del mismo no lo logran por sí sólo. Y lo hace principalmente por dos razones: por una parte, porque adolece de un capital social básico que garantice una mayor autonomía con respecto a los grupos dominantes. Por otra, porque estos grupos dominantes interactúan con el Estado del que en muchos casos forman parte y al que han llegado movidos por su interés en incidir las tomas de decisiones. En tal interjuego de intereses, el espacio público se convierte en el lugar de los *negocios privados*. En la coyuntura que cierra nuestro análisis- la década del '90- si las fórmulas adscriptivas se *descubren* como retrógradas o limitantes del proceso de individuación y autonomía es porque el flujo de fuerza de trabajo está respondiendo a los incentivos de la demanda y si no lo hace es consecuencia de la pervivencia de estas trabas. Allí el Estado y el mercado descubren que es mejor sustituir los pseudocódigos rurales por el Código Civil.

Finalmente, la experiencia santafesina permite mostrar cómo ambos actores se retroalimentan y se potencian desestructurando el imaginario del liberalismo vulgar que habla de las ausencias del Estado y la primacía del mercado.



